

Una sociedad desigual, una sociedad más violenta.

El concepto de la igualdad tiene varias connotaciones. Podemos referirnos a la igualdad ante la ley, al igual acceso de los derechos, a la igualdad de oportunidades, etc. De acuerdo a la Real Academia de la lengua española (RAE) igualdad es el “Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones” (RAE, 2020).

Sin duda que la igualdad refiere como ya muchos han escrito sobre ellos, a la real posibilidad de una persona de desarrollar sus capacidades de manera independiente a las condiciones de vida en las que le haya tocado nacer y vivir, ese el real alcance de una igualdad de oportunidades que a la vez permite un igual ejercicio de derechos y deberes.

Pero qué ocurre cuando esa igualdad no existe, o más bien de acuerdo a los estándares internacionales, se nos señala que un país posee condiciones de desigualdad altísimas, como lo que ocurre en Chile desde hace ya muchos años, cuando se dan a conocer los resultados del índice Gini. Lo que ocurre es básicamente lo que hoy estamos viviendo como sociedad: una sociedad frustrada, fragmentada y sobre todo, violenta.

La violencia en nuestro país ha sido un tema de preocupación, pero escasamente medida y definida, ya que su manifestación puede darse de diferentes maneras: la violencia intrafamiliar, la violencia entre jóvenes, en lugares públicos, el bullying escolar, la violencia ejercida en el lugar de trabajo, la violencia asociada a ciertos delitos como el robo con violencia, los homicidios, los delitos sexuales.

“Uno de los problemas principales del estudio de la violencia es la falta de una definición precisa que dé cuenta de la multiplicidad de formas en las que ésta se presenta o, cuando menos, señale sus características más importantes y comunes.” (Martínez A., La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio)

Esta violencia también tiene su expresión a nivel local. Diversos estudios, como los desarrollados por Fundación Paz Ciudadana¹ que determinaban “que a nivel de barrio surgen otro tipo situaciones asociadas a las condiciones de vulnerabilidad social de estos territorios, y que se relacionan con fenómenos de alta ocurrencia en el barrio, que no son necesariamente delictivos, ni victimizatorios para los vecinos pero amenazantes y peligrosos, y que suponemos entonces estarían determinando sus percepciones de temor”.

El mismo estudio ya identificaba el año 2011 las siguientes características:

- ✓ “Se destacan a nivel de barrio:

¹ Victimización, violencia e inseguridad en 10mbarrios críticos, Trujillo y Arévalo, 2011.

- Las situaciones de desorden social: a adolescentes causando problemas y enfrentamientos violentos entre personas, sin armas y con armas (de fuego y blancas)
- Delitos más frecuentes en el espacio público asociados a venta y consumo de alcohol y drogas. (82% consumo de drogas, 76% consumo de alcohol y 73% venta de drogas)
- ✓ En estos barrios la violencia (peleas entre bandas en espacio públicos, uso de armas de fuego) y la droga (consumo y tráfico) determinan los niveles altos de temor observados.
- ✓ Lo que se relaciona con los modelos de temor basado en factores vulnerabilidad y control social.
 - Se presume entonces que son elementos relacionados con la vulnerabilidad social del barrio y con la percepción de dificultades en los mecanismos de control social de la ilicitud, los que estarían influyendo en los niveles de temor observados. “²

Recientemente hemos sido testigos por la prensa de dos eventos de altos niveles de violencia y en sectores barriales de afluencia de público. Uno de ellos en Maipú, donde presumiblemente se trataba de bandas rivales de narcotraficantes en un ajuste de cuentas pero que como saldo dejó 1 persona fallecida y al menos 7 heridos. Horas más tarde en Cerrillos una banda enfrentaba a la Policía e Investigaciones, como saldo, 1 fallecido y 2 personas heridas.

Las consecuencias de una sociedad que no se hizo cargo a tiempos de sus desigualdades, desencadena una serie de hechos concatenadas a frustraciones y sentimientos de injusticia expresados en actos violentos muchas veces. Es hora de preguntarse si estamos dispuestos a hacer reales esfuerzos por acabar con esta otra pandemia.

² Ibidem

¿Y ahora qué?

Después de casi un año que en nuestro país asomaran los primeros anuncios referidos a la pandemia, hoy nos enfrentamos a otro Chile, y a otro mundo.

Durante los años 2019 y 2020, el mundo dio cuenta de diversos escenarios de manifestaciones y revueltas sociales: en Francia se alzaban los chalecos amarillos ante el anuncio de recortes presupuestarios de la serie de beneficios sociales con los que tradicionalmente ha contado ese país; en Estados Unidos se sucedían fuertes revueltas producto de las detenciones ilegales y discriminatorias de las que se responsabilizaba a la policía; en Chile la serie de eventos de violencia que se presentaron el día 18 de octubre de 2019 con posterioridad a los anuncios del alza del metro; Honduras también fue escenario de protestas sociales por los anuncios de privatización de la salud y la educación el año 2019; también en Ecuador se suscitaron eventos de masivas protestas por los anuncios de alza del combustible y así un sinnúmero de eventos.

Todo ello conllevó a nuevas formas de entendimiento de las autoridades con la sociedad organizada. Implicó repensar los tiempos respecto de cambios y reformas que se solicitaban hace años, como lo fue en nuestro país la nueva constitución. También implicó cambios radicales en las relaciones con ciertas instituciones como lo es la policía: ¿una policía para resguardar el orden público o una policía que acompañe al manifestante y le garantice su legítimo derecho a opinión y reunión? Todo ello requiere sin duda de un nuevo trato social que exprese de mejor manera y legítimamente lo que la sociedad entiende por una serie de relaciones e instituciones, por los derechos, garantías y deberes.

Pero en este contexto, la pandemia obligó además a poner a prueba cuán robusto era el desarrollo de nuestro país, cuán robustos eran los derechos y el bienestar de los chilenos y chilenas. La precariedad laboral se tomó la discusión. Las mujeres resultaban ser las más perjudicadas: quienes en una mayor proporción habían perdido su fuente laboral eran las mujeres, aumentaba la violencia intrafamiliar en escenarios de encierro y estudios dejaban de manifiesto que el machismo no era cosa del pasado: las mujeres habían asumido mayoritariamente las labores del hogar en este escenario de encierro.

Así las cosas, Chile no era el que pensábamos, la economía no era tan robusta como creíamos; la policía no era la institución mejor evaluada y más capacitada como creíamos y el machismo no era cosa del pasado.

Pero también hay otros temas que preocupan: en una sociedad donde la tecnología ya había hecho estragos en la capacidad de los más jóvenes por cultivar las relaciones sociales de la manera como al menos mi generación la entendía, esto se agrava aún más en un escenario de encierro donde no hay más clases presenciales, no hay más reuniones sociales, no hay maneras de socializar especialmente pensando en quienes iniciaban este tipo de vida en sus primeros años.

Entonces cabe preguntarse, qué nos espera en un escenario tan incierto, donde lo que creíamos superado no ha sido superado; donde las relaciones sociales tienden a desaparecer ya sea por los medios tecnológicos o por la necesidad de distanciamiento social; donde la economía se ha visto fuertemente resentida, y la salud puesta a prueba.

¿Qué se puede esperar para el año 2021?

Solo parece haber una respuesta: la robustez del Estado si es algo determinante en el devenir de los países, y la legitimidad de las acciones expresada en los contratos sociales también parecen ser la clave. Y como decía Kant “Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar.” Veremos qué tan sabios entonces resultamos ser....

INFORME DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

MATERIA: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL, PARA RESERVAR ESCAÑOS A REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO CONSTITUYENTE QUE SE CONFORME PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

DICIEMBRE 2020

Solicitante: H. Senador Pedro Araya Guerrero

Autora: Cristina Orellana Quezada

Periodo: Diciembre 2020

ANALISIS PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL, PARA RESERVAR ESCAÑOS A REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO CONSTITUYENTE QUE SE CONFORME PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. BOLETÍN N° 13129-07.

Con fecha 16.12.20. fue aprobado y despachado a ley el proyecto de reforma constitucional, correspondiente al Boletín N° 13.129-07. Iniciativa de ley que tuvo su origen en una moción de los diputados Jorge Rathgeb Schifferli, Diego Paulsen Kehr, Sebastián Torrealba Alvarado, René Manuel García García, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Carlos Kuschel Silva; de las diputadas Sofía Cid Versalovic y Paulina Núñez Urrutia, y del exdiputado Mario Desbordes Jiménez. Dicha ley fue publicada en el diario oficial de fecha 21.12.2020.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único. - Agréganse las siguientes disposiciones cuadragésima tercera, cuadragésima cuarta, cuadragésima quinta, cuadragésima sexta y cuadragésima séptima transitorias en la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto supremo N° 100, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2005:

"CUADRAGÉSIMA TERCERA. De la participación de los pueblos indígenas en la elección de convencionales constituyentes.

Con la finalidad de garantizar la representación y participación de los pueblos indígenas reconocidos en la ley N° 19.253, la Convención Constitucional incluirá diecisiete escaños reservados para pueblos indígenas. Los escaños sólo serán aplicables para los pueblos reconocidos en la ley N° 19.253 a la fecha de publicación de la presente reforma.

Podrán ser candidatos o candidatas las personas indígenas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta Constitución. Los candidatos deberán acreditar su condición de pertenecientes a algún pueblo, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Para el caso de las candidaturas del pueblo Chango, la calidad indígena se acreditará mediante una declaración jurada según lo dispuesto en el inciso décimo de esta disposición, o la solicitud de calidad de indígena presentada ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Cada candidato se inscribirá para representar a un solo pueblo indígena al cual pertenezca, dentro de los pueblos reconocidos por el artículo 1º de la ley N° 19.253.

Los candidatos deberán acreditar que tienen su domicilio electoral en las siguientes regiones, según el pueblo al que pertenezcan: para representar al pueblo Aimara, en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá o de Antofagasta; para representar al pueblo Mapuche, en las regiones Metropolitana de Santiago, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos o de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; para representar al pueblo Rapa Nui, en la comuna de Isla de Pascua; para representar al pueblo Quechua, en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá o de Antofagasta; para representar al pueblo Lican Antay o Atacameño, en la Región de Antofagasta; para representar al pueblo Diaguita, en las regiones de Atacama o de Coquimbo; para representar al pueblo Colla, en las regiones de Atacama o de Coquimbo; para representar al pueblo Chango, en las regiones de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo o de Valparaíso; para representar al pueblo Kawashkar, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; para representar al pueblo Yagán o Yámana, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Las declaraciones de candidaturas serán individuales, y, en el caso de los pueblos Mapuche, Aimara y Diaguita, deberán contar con el patrocinio de a lo menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o un cacicazgo tradicional reconocido en la ley N° 19.253, correspondientes al mismo pueblo del candidato o candidata. También podrán patrocinar candidaturas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que no estén inscritas, requiriéndose tres de ellas. Dichas candidaturas también podrán ser patrocinadas por a lo menos ciento veinte firmas de personas que tengan acreditada la calidad indígena del mismo pueblo del patrocinado, según lo dispuesto en el inciso décimo de esta disposición. En los demás pueblos bastará el patrocinio de una sola comunidad, asociación registrada u organización indígena no registrada; o bien, de a lo menos sesenta firmas de personas que tengan acreditada la calidad indígena del mismo pueblo del patrocinado, según lo dispuesto en el inciso décimo de esta disposición.

El patrocinio deberá respaldarse mediante un acta de asamblea patrocinante convocada para ese efecto, autorizada ante alguno de los siguientes ministros de fe: notarios, secretarios municipales o el funcionario a quien éstos deleguen esta función, oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o directamente ante el Servicio Electoral, por vía presencial o con clave única. Cada organización patrocinante sólo podrá patrocinar a una candidatura.

El patrocinio de candidaturas mediante firmas, a que alude esta disposición, podrá realizarse a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral, a la que se accederá previa autenticación de identidad. En este caso, se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de medios electrónicos. Por medio de esta plataforma, el Servicio Electoral generará la nómina de patrocinantes, en tiempo y forma, para efectos de la declaración de la respectiva candidatura. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento.

Para efectos de garantizar la paridad, cada declaración de candidatura deberá inscribirse designando una candidatura paritaria alternativa del sexo opuesto, y que cumpla con los mismos requisitos de el o la candidata a que eventualmente deba sustituir por razones de paridad.

Se confeccionarán cédulas electorales diferentes para cada uno de los pueblos indígenas reconocidos en el artículo 1º de la ley N° 19.253. La cédula se imprimirá titulándose con las palabras "Convencionales Constituyentes y Candidatos Paritarios Alternativos de Pueblos Indígenas". A continuación, se señalará el pueblo indígena al que corresponda. En cada cédula figurarán los nombres de todos los candidatos o candidatas del respectivo pueblo indígena. A continuación de los nombres, y en la misma línea, figurará entre paréntesis el nombre de el o la candidata paritaria alternativa respectiva y la región donde se ubica el domicilio electoral del candidato titular. Los nombres de los candidatos aparecerán ordenados en primer lugar por región y, dentro de ésta, en orden alfabético de apellidos, comenzando por las mujeres y alternando entre hombres y mujeres.

Para los efectos del ordenamiento del proceso, el Servicio Electoral identificará a los electores indígenas y al pueblo al que pertenecen, en el padrón a que se refiere el artículo 33 de la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, sobre la base de los siguientes antecedentes disponibles en el Estado: a) nómina de aquellas personas que estén incluidas en el Registro Nacional de Calidades Indígenas; b) datos administrativos que contengan los apellidos mapuche evidentes, conforme a lo establecido en la resolución exenta respectiva del Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; c) nómina de apellidos indígenas de bases de postulantes al Programa de Beca Indígena (de enseñanza básica, media y superior) desde el año 1993; d) Registro Especial Indígena para la elección de consejeros indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; e) Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas; f) Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Dicha nómina deberá ser publicada electrónicamente por el Servicio Electoral hasta ochenta días antes de la elección. Para los casos de las letras a), c), d), e) y f), la información deberá ser entregada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Servicio Electoral en los plazos que éste determine; en el caso de la letra b), la información deberá ser entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos.

Podrán votar indistintamente por los candidatos o candidatas a convencionales generales de su distrito o candidatos o candidatas indígenas de su propio pueblo: a) los ciudadanos y ciudadanas identificados por el Servicio Electoral como electores indígenas con arreglo al inciso anterior; b) los ciudadanos y ciudadanas que no figurando en dicha nómina, se identifiquen como electores indígenas previamente al día de la elección, obteniendo una autorización del Servicio Electoral por: 1.- acreditar su calidad de indígena mediante un certificado de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que demuestre su calidad de tal, o 2.- una declaración jurada, elaborada por el Servicio Electoral, donde se indique expresamente que la persona declara que cumple con cualquiera de las condiciones que establece la ley N° 19.253 para obtener la calidad indígena, otorgada ante los siguientes ministros de fe: notarios, secretarios municipales o el funcionario a quien éstos deleguen esta función, oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o directamente ante el Servicio Electoral, por vía presencial o con clave única.

Las declaraciones juradas podrán ser entregadas ante el Servicio Electoral hasta el cuadragésimo quinto día antes de la elección por el interesado, o la información de las mismas deberá ser presentada al Servicio Electoral por las demás entidades señaladas en este inciso. La acreditación posterior no procederá para el caso de los electores correspondientes al pueblo Rapa Nui.

Cada elector que se encuentre en alguno de los casos señalados en las letras establecidas en el inciso precedente podrá sufragar sólo por un candidato o candidata del pueblo al que pertenece, independiente de su domicilio.

Este padrón no será vinculante con el número de escaños a elegir ni tendrá propósitos distintos que el solo hecho de permitir el voto por candidatos de pueblos indígenas, en el marco del proceso de elección de convencionales constituyentes.

Las municipalidades y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena podrán destinar recursos y medios logísticos para facilitar la difusión y el registro de los electores indígenas.

Los diecisiete escaños reservados para pueblos indígenas contemplados en esta disposición serán determinados por el Servicio Electoral, dentro de los ciento cincuenta y cinco escaños a elegir en virtud de los distritos electorales establecidos en el artículo 141 de esta Constitución. Para estos efectos, el Servicio Electoral deberá descontar dichos escaños de los distritos electorales con mayor proporcionalidad de personas mayores de 18 años declaradas indígenas respecto de su población general en el último Censo de 2017, hasta completar el número de escaños establecido en esta disposición. Con todo, sólo se podrá descontar un escaño por distrito, y no se descontará ningún escaño respecto de los distritos electorales que elijan tres convencionales. Para dicho descuento, el Instituto Nacional de Estadísticas deberá entregar al Servicio Electoral la información respecto del total de las personas mayores de 18 años que se hayan declarado indígenas en el último Censo en cada distrito.

El Servicio Electoral deberá determinar en un plazo de cinco días desde la publicación de esta reforma los escaños que correspondan en virtud del inciso anterior.

Las elecciones de las y los representantes indígenas para la Convención Constitucional serán en un solo distrito en todo el país. La asignación de los escaños se realizará de la manera que sigue:

Será electa preliminarmente la candidatura más votada que corresponda al pueblo Mapuche y que tenga su domicilio electoral en la Región Metropolitana de Santiago, o en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins o del Maule. Luego, serán electas preliminarmente las cuatro candidaturas más votadas que correspondan al pueblo Mapuche y que tengan su domicilio electoral en las regiones de Ñuble, del Biobío o de La Araucanía. Enseguida, serán electas preliminarmente las dos candidaturas más votadas que correspondan al pueblo Mapuche y que tengan su domicilio electoral en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos o de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Además, serán electas preliminarmente las dos candidaturas más votadas que correspondan al pueblo Aimara.

Para los otros pueblos, se elegirá preliminarmente a un o una Convencional Constituyente, correspondiendo a la candidatura más votada para cada uno de ellos.

Se garantizará la paridad entre hombres y mujeres en la asignación final de los escaños para convencionales constituyentes representantes de los pueblos indígenas, de la manera que se señala a continuación:

En el caso del pueblo Mapuche, si una vez asignadas preliminarmente las candidaturas, las de un sexo superan al otro en más de un escaño, operará la sustitución por la respectiva candidatura paritaria alternativa de la siguiente manera: la candidatura del sexo sobrerrepresentado con menor votación cederá su escaño a su candidatura alternativa paritaria. Dicho proceso se repetirá tantas veces sea necesario, hasta que ningún sexo supere al otro en un escaño.

En el caso del pueblo Aimara, si los candidatos electos con las primeras mayorías fueran del mismo sexo, el candidato o candidata menos votado de los electos preliminarmente será sustituido siguiendo el mismo mecanismo señalado en el inciso anterior.

En el caso de los otros pueblos, que contarán cada uno con un solo escaño, si sumados sus escaños en el resultado final no se lograre equilibrio de género, deberá corregirse sustituyendo a la o las candidaturas menos votadas del sexo sobrerrepresentado por su candidatura paritaria alternativa hasta alcanzarse el equilibrio de género.

Para efectos de los incisos anteriores, se entenderá como candidatura menos votada la que resultare inferior en relación al número de votos obtenidos y el total de electores del pueblo correspondiente.

En todo lo demás, regirán las reglas comunes aplicables a los convencionales constituyentes.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. Con el objeto de asegurar la votación informada de los pueblos indígenas, existirá una franja electoral indígena que tendrá una duración total equivalente al trece por ciento del tiempo de duración establecido para la franja de Convencionales Constituyentes pertenecientes a la elección general, distribuido en forma proporcional entre los diversos pueblos.

CUADRAGÉSIMA QUINTA. Existirá un reembolso adicional de gastos electorales para los candidatos a escaños reservados para pueblos indígenas, consistente en 0,01 unidades de fomento por cada voto obtenido, en aplicación de las normas contenidas en el artículo 15 de la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017. La totalidad del reembolso de gastos electorales corresponderá siempre al candidato o candidata titular.

CUADRAGÉSIMA SEXTA. De la participación del pueblo Rapa Nui en la elección de convencionales constituyentes.

Con la finalidad de garantizar la representación y participación del pueblo Rapa Nui en la Convención Constitucional, de conformidad con lo prescrito en la disposición cuadragésima tercera transitoria, sólo podrán votar las personas que tengan calidad indígena de dicho pueblo acreditada en el Registro Nacional de Calidades Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o en el

Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

Podrán ser candidatos las personas indígenas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta Constitución. Adicionalmente, se deberá acreditar su condición de pertenecientes al pueblo Rapa Nui, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o su pertenencia en el Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, y su domicilio en la comuna de Isla de Pascua.

En lo que concierne al reembolso adicional de gastos electorales para los candidatos a convencionales Rapa Nui, se aplicará lo establecido en la disposición cuadragésima quinta transitoria precedente.

En todo lo demás, regirán la disposición cuadragésima tercera transitoria, en lo que sea aplicable, y las reglas comunes relativas a los convencionales constituyentes.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. De la participación de las personas con discapacidad en la elección de Convencionales Constituyentes.

Con la finalidad de resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en las elecciones de los Convencionales Constituyentes para redactar la nueva Constitución Política, de la totalidad de las declaraciones de candidaturas de las listas conformadas por un solo partido político o pactos electorales de partidos políticos, se establecerá un porcentaje mínimo del cinco por ciento del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad. Para calcular este cociente, se aproximará dicho porcentaje al entero superior.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, los candidatos deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el artículo 13 de la ley N° 20.422, a la fecha de presentación de sus candidaturas. El Servicio de Registro Civil e Identificación o, en su caso, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, dependientes del Ministerio de Salud, deberán facilitar al Servicio Electoral los datos debidamente actualizados de las personas con discapacidad certificadas, dentro de un plazo de quince días corridos a contar desde la publicación de esta

norma. Dicha información deberá ser actualizada hasta la fecha de presentación de las candidaturas.

Asimismo, podrá acreditarse la discapacidad a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, a la fecha de presentación de candidaturas, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá facilitar al Servicio Electoral los datos de los asignatarios dentro del plazo previsto en el inciso anterior.

La infracción de lo dispuesto en los incisos anteriores conllevará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a la Convención Constitucional de los partidos o pactos electorales respectivos que no hayan cumplido con estos requisitos. En caso de rechazo, se podrá corregir dicha infracción ante el Servicio Electoral dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución sobre aceptación o rechazo de las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Sin perjuicio de lo anterior, procederá reclamación en los términos del artículo 20 del mismo cuerpo legal."."

ANTECEDENTES FUNDANTES DE LA MOCION PARLAMENTARIA

Un sistema democrático, es más o menos exitoso, en la medida en la que es capaz de representar apropiadamente los intereses de la población e igualmente, reflejar la diversidad propia de sus ciudadanos. Cuando esto no está debidamente garantizado, la estabilidad del sistema está en riesgo. Una parte importante de la crisis que estalló en Chile el 18 de octubre de 2019, tiene que ver con las dificultades que ha tenido la democracia chilena para garantizar una mejor representatividad de su población. En este sentido, un caso específico guarda relación con la manera en la que nuestro actual sistema político logra que la diversidad étnica existente en nuestro país se traduzca en mecanismos de participación y representación política para los pueblos indígenas. La experiencia, tanto nacional como internacional, ha sido enfática en mostrar que no resolver de manera inclusiva y oportuna esta injusticia dentro de un marco institucional, agudiza conflictos étnicos en detrimento de la paz e integración social.

En la esfera internacional, se ha buscado institucionalizar la participación de los pueblos indígenas a través de varios métodos, que dependen en su estructura de los distintos niveles de organización de los Estados, desde unidades administrativas locales a las nacionales, como también de los organismos o poderes del Estado en los que estas entidades representativas indígenas se encuentran inmersos o con los que se relacionan¹.

Este tipo de medidas, que se enmarcan en el conjunto más amplio de las acciones afirmativas, tienen como objetivo, no solo disminuir la subrepresentación histórica de determinados pueblos indígenas, sino que también configurar el poder en la sociedad de modo que no haya grupos subordinados, o que se vean limitados en sus libertades y derechos. Lo que es coherente con los principios liberales clásicos respecto de la libre determinación o autogobierno, que el derecho internacional hace extensivo a los pueblos indígenas. Ejemplo de esto se puede encontrar en

¹ Fuentes, C & Sánchez, M (2018). Asientos reservados para pueblos indígenas: Experiencia comparada. Serie Policy Papers. Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Disponible en https://www.ciir.cl/ciir_2019/wp-content/uploads/2018/07/policy-paper-UPP-n%C2%BA1-2018-1.pdf

los artículos 4 y 5 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007:

“Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (Art. 4).

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” (Art. 5).

Así, en lo respectivo a las instituciones representativas de carácter nacional, una de las medidas que ha sido empleada en países que cuentan con una diversidad étnica relevante, es la fórmula de los escaños reservados. Misma fórmula que ha sido empleada para diferencias nacionales, lingüísticas e incluso religiosas en la medida en la que se transforman en clivajes relevantes para una apropiada distribución del poder político².

El mecanismo electoral de los escaños reservados, para este fin, se puede definir como: *“reglas electorales formales que garantizan un número mínimo de representantes políticos para determinados grupos étnicos”*³. Es importante diferenciarlos del sistema de cuotas, que generalmente no busca garantizar un resultado final, sino que ofrecer pisos mínimos para disminuir los factores que influyen en la subrepresentación de algún grupo social, tal como lo contempla actualmente la Ley N° 20.840.

Este sistema de inclusión es actualmente usado en países muy distintos entre sí, tales como Bolivia, India, Nueva Zelanda y Colombia, aunque con arreglos y resultados diferentes dependiendo de las características históricas, políticas y

² Reynolds, A. (2005). Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note, *Legislative Studies Quarterly*, 30(2), 301-310.

³ Bird, K. (2014). Ethnic quotas and ethnic representation worldwide, *International Political Science Review*, 35(1) 12–26, citado por Hernández, R. (2019) en Escaños reservados para minorías étnicas: Experiencia extranjera. Asesoría Técnica Parlamentaria. BCN. Disponible en: <https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26928/1/SUP119118EscanosReservados.pdf>

culturales de cada país. De todos los analizados en la experiencia comparada, el que tendría menos dificultad de ser aplicado en Chile es el caso colombiano, ya que es más simple al establecer una circunscripción electoral nacional único diferenciado para los candidatos indígenas, al que cualquier ciudadano puede acceder sin tener que contar con un padrón distinto.

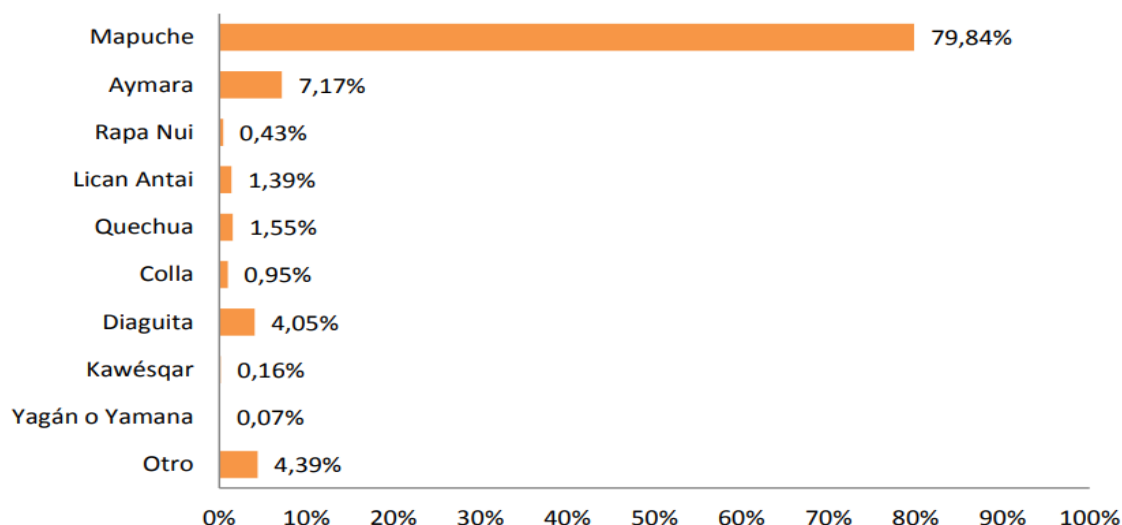
Nuestro país ha contado desde siempre con una importante diversidad étnica, tal como lo señala la Ley N° 19.253, conocida como Ley Indígena, en su art. 1, en los incisos primero y segundo:

“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.

El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores”.

En términos estadísticos, este reconocimiento estatal se corresponde con el autorreconocimiento de los sectores de la población que se identifican con estas etnias, tal como lo muestra el último censo. De los cerca de 17.076.076 catastrados, un 12,8% se identifica como pueblo indígena, cuyo número exacto es 2.185.792 personas⁴. Dentro de ese porcentaje, el pueblo mapuche es mayoritario siendo casi un 80% del total, el resto de los distintos grupos indígenas tienen la siguiente distribución:

⁴ INE (2017). Radiografía de género: Pueblos originarios en Chile 2017. Unidad de Estudios y Estadísticas de Género. Disponible en: <https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/radiografia-de-genero-pueblos-originarios-chile2017.pdf>



Fuente: Censo 2017, INE Chile.

El contexto histórico de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado chileno ha sido conflictivo, y somos además uno de los pocos países de la región que no cuenta con un reconocimiento constitucional para estos grupos étnicos. Sin embargo, es importante considerar que *“un aspecto práctico que suele obviarse en las discusiones sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es la cuestión de su implementación (...) el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas en las constituciones latinoamericanas en muchos casos no ha ido acompañado de los necesarios mecanismos institucionales para hacerlos efectivos”*⁵. Ahora bien, en el marco de un proceso de cambio constitucional, el aspecto procedimental de la implementación puede preceder a su consagración sustantiva, al permitir desde un comienzo que los pueblos indígenas chilenos sean reconocidos como parte del poder constitucional originario.

⁵ Donoso, S. & Palacios, C. (2018). Pueblos indígenas y reconocimiento constitucional: aportes para un debate. Temas de la Agenda Pública (UC). Disponible en: <https://politicaspUBLICAS.uc.cl/wp-content/uploads/2018/03/PDF-Temas-103-Indigenas.pdf>

DETALLES DE LA TRAMITACION DE LA LEY

Con fecha 27 y 30 de noviembre y 1, 2, 7, 9 y 10 de diciembre de 2020, sesionó telemáticamente la Comisión Mixta constituida con arreglo al artículo 70 de la Carta Fundamental, encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República.

Asistieron a las sesiones telemáticas celebradas por la Comisión Mixta, además de sus miembros, los senadores Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Ximena Órdenes y Yasna Provoste, Francisco Chahuán, Álvaro Elizalde, José García, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Kenneth Pugh y Jaime Quintana, y los diputados Joanna Pérez, Gabriel Boric, Miguel Crispi, Andrés Molina y Leopoldo Pérez.

Por parte del ejecutivo concurrieron, los siguientes personeros: Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, acompañado por el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez, y los asesores Víctor Martínez y Federico Ureta. La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, acompañada por el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, y los asesores Felipe Aliaga y Javier Valdés. El Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, acompañado por el Consejero

Andrés Tagle; el Director Nacional, Raúl García, y el Secretario Abogado, Álvaro Castañón.

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

En sesión celebrada el 26 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados, esto es, la Cámara de origen, designó como miembros de la Comisión Mixta a los diputados Pepe Auth Stewart, Juan Antonio Coloma Álamos, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, René Saffirio Espinoza y Leonardo Soto Ferrada. Posteriormente, el Diputado señor Auth fue reemplazado en forma permanente por el diputado Matías Walker Prieto.

Por su parte el Senado, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2020, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Prevía citación de la Presidenta del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 27 de noviembre de 2020, con la asistencia de sus miembros. En dicha oportunidad, eligió por unanimidad como Presidente senador De Urresti, y acordó que el reglamento por el que se regiría sería el del Senado. Enseguida, se abocó al cumplimiento de su cometido.

DETALLES DEL DEBATE

Al objeto de ordenar el debate según temas a resolver, la Comisión Mixta identificó tres nudos o cuestiones centrales vinculadas al proyecto de reforma constitucional necesarios de analizar, a saber:

1. Criterio de auto identificación o padrón especial de electores indígenas;
2. Número de escaños reservados;
3. Carácter supernumerario de los escaños reservados o dentro del número de convencionales (155) ya establecido en el artículo 141 de la Carta Fundamental.

1. Criterio de auto identificación o padrón especial

Como fórmula para resolver la discrepancia surgida respecto de esta disyuntiva, el Diputado señor Saffirio propuso una norma del siguiente tenor:

“Los ciudadanos y ciudadanas que participen del proceso de elección de miembros de la Convención Constitucional podrán requerir al presidente de la mesa receptora de sufragios la cédula correspondiente a la elección de miembros indígenas de dicha Convención, para los efectos de emitir en ella su sufragio en aquellos distritos donde hubiere candidatos indígenas.”.

Sometida a votación esta propuesta, se obtuvo el siguiente resultado: votaron por el rechazo los Senadores señora Ebensperger y señor Galilea y Diputados señores Coloma y Fuenzalida. Votaron a favor el Senador señor Araya y el Diputado señor Saffirio. Se abstuvieron los Senadores señores De Urresti y Huenchumilla y los Diputados señores Soto y Walker.

Repetida la votación con arreglo al artículo 178 del Reglamento del Senado, se verificó el resultado que sigue: votaron por el rechazo los Senadores señora Ebensperger y señor Galilea y Diputados señores Coloma, Fuenzalida y Walker. Votaron a favor el Senador señor Araya y el Diputado señor Saffirio. Se abstuvieron los Senadores señores De Urresti y Huenchumilla y el Diputado señor Soto.

Dado el resultado anterior, y de conformidad con el citado artículo 178 del Reglamento, se sumaron las abstenciones al voto mayoritario de rechazo, por lo que la propuesta se dio por rechazada.

Por su parte, el Senador señor Huenchumilla planteó la posibilidad de resolver este aspecto mediante la siguiente proposición normativa:

“Para los efectos del ordenamiento del proceso, el Servicio Electoral confeccionará un padrón electoral indígena en base a los antecedentes disponibles en el Estado, tales como: a) solicitud de calidad indígena en la CONADI; b) nómina de apellidos evidentemente mapuche de la CONADI; c) nómina de apellidos indígenas de bases de postulantes a Programas de Becas Indígenas (básica, media y superior) desde el año 1993; d) registro de personas indígenas para elección de Consejeros Indígenas de la CONADI; e) registro de socios de comunidades y asociaciones indígenas jurídicas de la CONADI; f) diccionarios de apellidos indígenas editados por la CONADI y por otras entidades académicas y personeros públicos y privados, que son de público conocimiento, y g) datos del Censo poblacional del año 2017.

Este padrón no será vinculante con el número de escaños a elegir.

Podrán votar por los convencionales de escaños indígenas: a) los ciudadanos y ciudadanas que aparezcan en el padrón que confeccionará el Servicio Electoral; b) los ciudadanos y ciudadanas que no apareciendo en dicho padrón acrediten su calidad de indígena mediante un certificado de la CONADI que demuestre su calidad de tal, o una declaración jurada otorgada ante un ministro de fe en la que manifiesten su calidad de indígena, o una declaración jurada otorgada ante el Servicio Electoral, para lo cual éste deberá habilitar un sitio tecnológico con tal finalidad. Para el caso que no contare con los documentos señalados en la letra b), el ciudadano o ciudadana podrá firmar una declaración jurada en un formulario que el Servicio Electoral dispondrá en cada mesa receptora de sufragios, en el que manifieste su calidad de indígena.

No podrán votar por los convencionales de escaños indígenas, los ciudadanos y ciudadanas que no tengan la calidad de indígenas.”.

El Senador señor Galilea y el Diputado señor Soto fueron partidarios de conferirle una redacción distinta a la propuesta anterior, para precisar su sentido y alcance, quedando como sigue:

“Para los efectos del ordenamiento del proceso, el Servicio Electoral identificará a los electores indígenas en el padrón a que se refiere el artículo 33 de la ley N° 18.556, en base a los siguientes antecedentes disponibles en el Estado: a) nómina de aquellas personas que estén incluidas en el Registro Nacional de Calidades Indígenas; b) datos administrativos que contengan los apellidos mapuche evidentes, conforme a lo establecido en la resolución exenta respectiva del Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; c) nómina de apellidos indígenas de bases de postulantes al Programa de Beca Indígena (de enseñanza básica, media y superior) desde el año 1993; d) Registro Especial Indígena para la elección de consejeros indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; e) Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas; f) Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Dicha nómina deberá ser publicada por el Servicio Electoral hasta 60 días antes de la elección. Para los casos de las letras a), c), d), e) y f), la información deberá ser entregada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Servicio Electoral en los plazos que éste determine; en el caso de la letra b), la información deberá ser entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos.

Podrán votar por los convencionales de escaños indígenas: a) los ciudadanos y ciudadanas identificados por el Servicio Electoral como electores indígenas con arreglo al inciso anterior; b) los ciudadanos y ciudadanas que no figurando en

dicha nómina, se identifiquen como electores indígenas previamente al día de la elección, obteniendo una autorización del Servicio Electoral por: 1.- acreditar su calidad de indígena mediante un certificado de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que demuestre su calidad de tal, o 2.- una declaración jurada, elaborada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde se indique expresamente que la persona declara que cumple con cualquiera de las condiciones que establece la ley N° 19.253 para obtener la calidad indígena, otorgada ante los siguientes ministros de fe: notarios, secretarios municipales, oficial del Registro Civil, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o directamente ante el Servicio Electoral. Las declaraciones juradas podrán ser entregadas ante el Servicio Electoral hasta el cuadragésimo quinto día antes de la elección por el interesado, o la información de las mismas deberá ser presentada al Servicio Electoral por las demás entidades señaladas en este inciso. La acreditación posterior no procederá para el caso de los electores correspondientes al pueblo Rapa Nui, los que solo podrán ser identificados en razón de su acreditación en el Registro Nacional de Calidades Indígenas como integrantes de este pueblo.

Este padrón no será vinculante con el número de escaños a elegir ni tendrá propósitos distintos que el sólo hecho de permitir el voto por candidatos de pueblos originarios en el marco del proceso de elección de convencionales constituyentes.

Las municipalidades y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena podrán destinar recursos y medios logísticos para facilitar la difusión y el registro de los electores indígenas.”.

Esta reformulación de la propuesta del Senador Huenchumilla, fue objeto de las enmiendas que se detallan:

En lo que concierne a la declaración jurada, se consideró más adecuado que sea el Servicio Electoral el organismo que tenga a su cargo la elaboración del formulario correspondiente, y no la CONADI.

Tratándose de la declaración jurada prestada directamente ante el SERVEL, se optó por precisar que, para facilitar el trámite, ello podrá darse en forma presencial o por medios tecnológicos con la utilización de clave única.

En lo que atañe a los electores del pueblo Rapa Nui, se agregó la posibilidad de su identificación mediante el registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

Sometida a votación esta última propuesta con la redacción y precisiones consignadas, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Senadores Ebensperger, De Urresti y Galilea y los Diputados Coloma, Fuenzalida, Soto y Walker. Votó por el rechazo el Diputado Saffirio. Se abstuvieron los Senadores Araya y Huenchumilla.

Cabe acotar que estas normas, así estructuradas, fueron incluidas como incisos en la disposición cuadragésima tercera transitoria, con la redacción que la Comisión Mixta determinara en definitiva para esta disposición, a objeto de dar cuenta del acuerdo político a que arribara, tendiente a materializar el propósito principal de establecer escaños reservados para los pueblos originarios, y cuyo tenor fuera aprobado por la unanimidad de la Comisión Mixta, Senadores Ebensperger y Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla y Diputados Coloma, Fuenzalida, Saffirio, Soto y Walker.

2. Número de escaños reservados y carácter supernumerario

El Diputado Saffirio propuso que el número de escaños reservados fuera de dieciocho, donde nueve de ellos estén dentro de los 155 escaños a que se refiere el artículo 141 de la Carta Fundamental (lo que implicaría rebajas en distritos electorales) y nueve sean supernumerarios.

Por su parte, con el fin de encontrar una fórmula de transacción, el Senador Huenchumilla planteó la norma que sigue, y que fuera también suscrita por el Honorable Diputado señor Walker:

“Cuadragésima tercera. De la participación de los pueblos indígenas en la elección de convencionales constituyentes.

Con la finalidad de garantizar la representación y participación de los pueblos indígenas reconocidos en la ley N° 19.253, la Convención Constitucional estará integrada también por 18 escaños indígenas. Los escaños sólo serán aplicables

para los pueblos reconocidos en la ley N° 19.253 a la fecha de publicación de la presente reforma.

Podrán ser candidatos las personas indígenas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta Constitución. Los candidatos deberán acreditar su condición de pertenecientes a algún pueblo, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Cada candidato se inscribirá para representar a un solo pueblo indígena al cual pertenezca, dentro de los pueblos reconocidos por el artículo 1° de la ley N° 19.253.

Los candidatos deberán acreditar que tienen su domicilio electoral en las siguientes regiones, según el pueblo al que pertenezcan: para representar al pueblo Aimara, en las regiones XV, I o II; para representar al pueblo Mapuche, en las regiones Metropolitana, IV, V, VI, VII, XVI, VIII, IX, XIV, X; para representar al pueblo Rapa Nui, en la comuna de Isla de Pascua; para representar al pueblo Quechua, en las regiones XV, I o II; para representar al pueblo Lican Antay o Atacameño, en la región II; para representar al pueblo Diaguita, en las regiones III o IV; para representar al pueblo Colla, en las regiones III o IV; para representar al pueblo Chango, en las regiones II, III, IV o V; para representar al Pueblo Kawashkar, en la región XII; para representar al pueblo Yagán o Yámana, en la región XII.

Las declaraciones de candidaturas serán individuales y deberán contar con el patrocinio de al menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o un cacicazgo tradicional reconocido en la ley N° 19.253, correspondientes al mismo pueblo del candidato o candidata. También podrán patrocinar candidaturas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que no estén inscritas, requiriéndose tres de ellas. En los casos de los pueblos Rapa Nui, Chango, Kawashkar y Yagán, bastará el apoyo de una sola comunidad, asociación registrada u organización indígena no registrada.

El patrocinio deberá respaldarse mediante un acta de asamblea patrocinante convocada para ese efecto, autorizada por un ministro de fe o secretario municipal o el funcionario a quien delegue esta facultad. Cada organización patrocinante solo podrá patrocinar a una candidatura.

Se confeccionarán cédulas electorales indígenas diferentes para cada uno de los pueblos indígenas reconocidos en el artículo 1° de la ley N° 19.253. La cédula se imprimirá titulándose con las palabras “Convencionales Constituyentes

representantes de los pueblos indígenas”, y a continuación aparecerá la designación del pueblo indígena a que corresponda.

En cada cédula figurará, junto al nombre de cada candidato, la región del país donde se ubica su domicilio electoral. Los nombres de los candidatos aparecerán en orden alfabético de apellidos, comenzando por las mujeres y alternando entre hombres y mujeres.

Existirán en la Convención Constitucional 18 escaños reservados a pueblos originarios, elegidos de conformidad con los requisitos señalados en los incisos precedentes. Nueve de ellos tendrán la condición de supernumerarios respecto de los 155 establecidos, y nueve serán determinados por el Servicio Electoral dentro de los 155 ciudadanos electos en virtud de los distritos electorales establecidos en el artículo 141 de esta Constitución. Para estos efectos, el Servicio Electoral deberá descontar dichos escaños de los distritos electorales en los que exista mayor cantidad de población indígena en proporción a los electores habilitados en la última elección de diputados y diputadas, hasta completar el número indicado en este inciso. Con todo, no podrá descontarse ningún escaño respecto de los distritos electorales actuales que cuenten con número igual o inferior a 3 escaños.

El Servicio Electoral deberá determinar en un plazo de cinco días desde la publicación de esta reforma los escaños que correspondan en virtud del inciso anterior.

Las elecciones de las y los representantes indígenas para la Convención Constitucional serán en un solo distrito en todo el país. La asignación de los escaños se realizará de la manera que sigue:

Será electa preliminarmente la candidatura más votada que corresponda al pueblo Mapuche y que tenga su domicilio electoral en la Región Metropolitana, o en las regiones IV, V, VI o VII. Luego, serán electas preliminarmente las cinco candidaturas más votadas que correspondan al pueblo Mapuche y que tengan su domicilio electoral en las regiones XVI, VIII y IX. Enseguida, serán electas preliminarmente las dos candidaturas más votadas que correspondan al pueblo Mapuche y que tengan su domicilio electoral en las regiones XIV y X.

Además, serán electas preliminarmente las dos candidaturas más votadas que correspondan al pueblo Aimara y que tengan su domicilio electoral en la región XV, I o II.

Para los otros pueblos, se elegirá preliminarmente a un Convencional Constituyente, correspondiendo a la candidatura más votada para cada pueblo,

cuando tenga su domicilio electoral en: la comuna de Isla de Pascua, en el caso del pueblo Rapa Nui; la región XII, tratándose del pueblo Kawashkar; la región XII, tratándose del pueblo Yagán o Yámana; las regiones XV, I o II, tratándose del pueblo Quechua; la región II, tratándose del pueblo Lican Antay o Atacameño; las regiones III o IV, tratándose del pueblo Diaguita; las regiones III o IV, tratándose del pueblo Colla; las regiones II, III, IV o V, tratándose del pueblo Chango.

Se garantizará la paridad entre hombres y mujeres en la asignación final de los escaños para convencionales constituyentes representantes de los pueblos indígenas de la manera que se señala a continuación:

En el caso del pueblo Aimara, si los candidatos electos con las primeras mayorías fueran del mismo sexo, el candidato o candidata menos votado de los electos preliminarmente será reemplazado por la candidata o el candidato siguiente en votación que corresponda al sexo subrepresentado.

En el caso del pueblo Mapuche, si las primeras ocho primeras mayorías no corresponden en su mitad a cada uno de los sexos, deberá corregirse el resultado, reemplazando a los candidatos que serían electos preliminarmente que cuenten con menos votos por la siguiente mayoría de un candidato o candidata del sexo subrepresentado en su misma categoría de domicilio, hasta completar la paridad.

En el caso de los otros pueblos que contarán cada uno con un solo escaño, si sumados sus escaños resulta que el resultado final es superior a uno en la relación entre hombres y mujeres, deberá corregirse reemplazando a la candidatura menos votada de los que resultarían preliminarmente electos por la siguiente candidatura en votos del mismo pueblo que corresponda al sexo subrepresentado. Esto se hará en los resultados de cada pueblo, hasta conseguir que la diferencia total en la relación entre hombres y mujeres electos no sea superior a uno.

En todo lo demás, regirán las reglas comunes aplicables a los convencionales consituyentes.”.

Esta norma fue enmendada en el sentido de que se incorporaron como nuevos incisos las normas acordadas a propósito de la forma de identificación de electores indígenas, según se ha reseñado más arriba.

Sometida a votación esta proposición, fue aprobada en tales términos por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla y los Diputados Saffirio, Soto y Walker. Votaron por el rechazo los Senadores Ebensperger y Galilea y los Diputados Coloma y Fuenzalida.

La Senadora Ebensperger hizo reserva de constitucionalidad respecto de la asignación de escaños supernumerarios que contempla esta disposición, así concebida, basada en que ampliaría el número de 155 escaños aprobado en el artículo 141 de la Carta Fundamental, por lo que, por mandato de su artículo 127, requeriría para su modificación de un quórum de aprobación de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, y no el de los tres quintos.

Es dable mencionar que el Senador Galilea estuvo por reponer la proposición normativa que hiciera con ocasión del estudio de este punto en el segundo trámite constitucional, cuyo tenor es el que se señala: “Cuadragésima tercera. De la participación de los pueblos indígenas en la elección de Convencionales Constituyentes.

Con el objetivo de garantizar la representación y participación de los pueblos indígenas reconocidos en la ley N° 19.253, se asegurarán 15 escaños dentro de los Convencionales Constituyentes establecidos en el artículo 141 de la Constitución a representantes de los pueblos indígenas.

Para efectos de lo anterior, se creará un Padrón Especial Indígena, elaborado por el Servicio Electoral, en el cual podrán inscribirse aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Constitución y con lo dispuesto en la Ley N° 19.253. Dichas inscripciones deberán ser realizadas ante el Servicio Electoral para la conformación del padrón respectivo hasta la fecha establecida en la Ley N° 18.556.

Las personas inscritas en el Padrón Especial Indígena señalado en el inciso anterior solo podrán votar por candidatos o candidatas que estén inscritos en el mismo. Dicho padrón conformará un único distrito indígena nacional especial, que operará bajo las mismas reglas de los distritos establecidos en las reglas comunes aplicables a los Convencionales Constituyentes.

El número de escaños reservados del distrito indígena será de 15 escaños, correspondientes en la siguiente proporción que se asegurará a cada pueblo: 7 escaños correspondientes al pueblo Mapuche; 2 escaños correspondientes al pueblo Aymara, 1 escaño correspondiente al pueblo Atacameño, 1 escaño correspondiente al pueblo Colla y/o Chango; 1 escaño correspondiente al pueblo Quechua; 1 escaño correspondiente al pueblo Diaguita, 1 escaño correspondiente al pueblo Kawésqar y/o Yagan y 1 escaño correspondiente al pueblo Rapa Nui.

Se descontarán los respectivos escaños indígenas de los distritos establecidos para la última elección de diputados y diputadas, disminuyendo un escaño en aquellos distritos con mayor cantidad de convencionales respecto del número de electores habilitados en la señalada elección del respectivo distrito, hasta completar el número establecido de acuerdo al inciso anterior. Con todo, ningún distrito podrá resultar con menos de tres Convencionales Constituyentes electos. Excepcionalmente, el escaño a descontar en el distrito número 6º establecido en el artículo 188 del DFL N° 2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, será descontado del distrito número 7º del mismo artículo. Lo anterior deberá ser informado por el Servicio Electoral hasta 30 días antes de la fecha de cierre de inscripción de las listas mediante una resolución publicada en el Diario Oficial.

Los ciudadanos que deseen ser candidatos o candidatas a esta elección y que integren el Padrón Especial Indígena podrán presentarse válidamente ya sea en razón de la militancia en un partido político, o en base al patrocinio de al menos una asociación y/o comunidad indígena. Dichos candidatos o candidatas deberán cumplir con la acreditación de su calidad indígena de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.253, correspondiente a alguno de los pueblos señalados en este artículo.

Dichos candidatos o candidatas se deberán presentar en listas o como independientes para cada pueblo correspondiente. Dichas listas se regirán por las reglas establecidas para las listas y pactos tanto de partidos políticos o de independientes reguladas en la disposición transitoria vigésima novena, en todo lo

que les sean aplicables, con una cantidad de candidaturas de cada lista equivalente al número inmediatamente siguiente al número de escaños asignados para cada pueblo. Dichas listas, por cada pueblo, deberán seguir las reglas establecidas en la disposición transitoria trigésima, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con un hombre en los casos que proceda.

La referida elección se resolverá bajo el sistema de cifra repartidora que rige la elección de diputadas y diputados regulada en la Ley N° 18.700, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asignándose este sistema a los escaños correspondientes por cada pueblo.

Realizada dicha asignación preliminar, por pueblo, bajo el sistema señalado en el inciso anterior, se corregirá la misma en base a las reglas establecidas en la disposición transitoria trigésimo primera. En los pueblos en que no pueda corregirse dicha composición por ser uninominales, se determinará la cantidad de hombres y mujeres que deban aumentar y disminuir, respectivamente, considerados estos en su conjunto según la proporción establecida en el numeral 1 de la disposición trigésimo primera. Definida dicha cantidad, se ordenarán las candidaturas asignadas preliminarmente del sexo sobrerrepresentado según su votación individual de menor a mayor. Se proclamará Convencional Constituyente a la candidatura del sexo subrepresentado, a la que no se le haya asignado el escaño preliminarmente, del mismo partido político y el mismo pueblo, en caso de lista de partido político único o pacto electoral, o a la candidatura con mayor votación del sexo subrepresentado, en caso de las listas constituidas entre candidaturas independientes, en lugar de la candidatura asignada preliminarmente de menor votación del sexo sobrerrepresentado, dentro del mismo pueblo.

Para los efectos del sufragio para elegir Convencionales Constituyentes representantes de pueblos indígenas, el presidente de la mesa respectiva a su domicilio electoral le proporcionará a los ciudadanos inscritos en el Padrón Especial Indígena solo la cédula correspondiente a éste. Dicha cédula se imprimirá titulándose con las palabras “Convencionales Constituyentes representantes de los pueblos indígenas” y a continuación aparecerán las respectivas listas y sus candidatos y candidatas. En cada cédula figurará, junto al nombre de cada candidato y candidata, el pueblo indígena al que pertenece. Los nombres de los candidatos y candidatas aparecerán en orden alfabético de apellidos, comenzando por las mujeres y alternando entre hombres y mujeres.

En todos los demás asuntos, regirán las reglas comunes aplicables a los Convencionales Constituyentes.”.

Posteriormente, en el espíritu de alcanzar un acuerdo político para materializar el objetivo principal de escaños reservados para pueblos indígenas perseguido mediante este proyecto de reforma constitucional, la Comisión Mixta reabrió la discusión de esta norma.

En ese orden, la Comisión fue partidaria de, primeramente, pronunciarse acerca de la idea de reconsiderar los aspectos relativos al número de escaños, el patrocinio de candidaturas y las reglas sobre paridad entre hombres y mujeres. Todos estos asuntos serían, más tarde, materia de diálogo entre los parlamentarios, para afinar el mencionado acuerdo político.

Sometido a votación dicho planteamiento, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Senadores Ebensperger y Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla, y los Diputados Coloma, Fuenzalida, Saffirio y Soto. Se abstuvo el Diputado Walker, quien se manifestó contrario a la posibilidad de votar separadamente la disposición del pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Enseguida, el Senador Huenchumilla propuso incorporar una disposición transitoria nueva, del tenor que sigue: “Cuadragésima cuarta. Con el objeto de asegurar la votación informada de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente chileno, existirá una franja electoral indígena y afrodescendiente chilena que tendrá una duración total equivalente al 13% del tiempo de duración establecido para la franja de Convencionales Constituyentes pertenecientes a la elección general, distribuido en forma proporcional entre los diversos pueblos.”.

La Comisión Mixta entiende que el tiempo que esta franja electoral contempla ha de calcularse en función del número de escaños a elegir por los pueblos originarios, de manera de respetar un criterio de proporcionalidad entre ellos.

Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla y los Diputados Saffirio, Soto y Walker. Votaron por el rechazo los Senadores Ebensperger y Galilea y los Diputados Coloma y Fuenzalida.

A continuación, el Senador Huenchumilla propuso la disposición transitoria, nueva, que se señala: “Cuadragésima quinta. Existirá un reembolso adicional de gastos electorales, de cargo electoral, para los candidatos a escaños reservados para pueblos originarios, consistente en 0,01 Unidades de Fomento por cada voto obtenido, en aplicación de las normas contenidas en el artículo 15 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.884, Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.”.

La Comisión Mixta estuvo por eliminar la frase “de cargo electoral” por considerarla innecesaria, atendida la explícita referencia que contiene la norma que se plantea al artículo 15 de la LOC sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

Sometida a votación esta proposición con la enmienda reseñada, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla y los Diputados Saffirio, Soto y Walker. Votaron por el rechazo los Senadores Ebensperger y Galilea y los Diputados Coloma y Fuenzalida.

Posteriormente, la Comisión Mixta, como resultado del acuerdo político alcanzado para materializar un texto del proyecto de reforma constitucional de que se trata, y para conciliar esta norma con las relativas a paridad incluidas en este último texto, estuvo por agregar una oración final que precise que la totalidad del reembolso de gastos electorales corresponderá siempre al candidato o candidata titular. En tales términos, esta disposición transitoria fue incluida en la votación del citado texto.

Luego, el Senador Huenchumilla propuso incorporar la siguiente disposición transitoria, nueva: “Cuadragésima sexta. De la participación del Pueblo Rapa Nui en la elección de convencionales constituyentes. Con la finalidad de garantizar la representación y participación del Pueblo Rapa Nui en la Convención Constitucional, de conformidad con lo prescrito en la disposición cuadragésima tercera transitoria, solo podrán votar las personas rapa nui residentes de la comuna de Isla de Pascua.

Podrán ser candidatos las personas indígenas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta Constitución. Adicionalmente, se deberá acreditar su condición de pertenecientes al Pueblo Rapa Nui, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Las declaraciones de candidaturas serán individuales. Además, las candidaturas deberán contar con el patrocinio de una sola comunidad o asociación indígena registrada ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o de una organización indígena tradicional.

Podrán votar por los candidatos rapa nui solo los electores habilitados, quienes serán aquellos que están registrados como pertenecientes a dicho pueblo en los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Para tales efectos, dicha entidad facilitará al SERVEL todos los registros con que cuente, que permitan identificar a las personas pertenecientes al Pueblo Rapa Nui, con los cuales el SERVEL confeccionará un subregistro dentro del registro electoral que identificará a los electores habilitados para votar por candidatos rapa nui en el distrito 7. Al momento de la votación, los electores habilitados podrán decidir votar por la convencional rapa nui o en la elección general de convencionales. El candidato electo será el más votado por los electores habilitados.

En lo que concierne al reembolso adicional de gastos electorales para los candidatos a convencionales rapas nui, se aplicará lo establecido en la disposición cuadragésima quinta transitoria precedente.

En todo lo demás, regirán las reglas comunes aplicables a los convencionales constituyentes.”.

Sometida a votación esta disposición *ad referendum*, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron por la afirmativa los Senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla y los Diputados Saffirio, Soto y Walker. Votaron en contra los Senadores Ebensperger y Galilea y Diputados Coloma y Fuenzalida.

Con motivo del análisis de esta propuesta, la Comisión Mixta tuvo en consideración una carta suscrita por el Presidente del Consejo de Ancianos Mau

Hatu o Rapa Nui, personeros electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua y el Alcalde de la I. Municipalidad de Rapa Nui, que fuera remitida con posterioridad a la votación *ad referendum* antes consignada, en la que se expresa su opinión acerca de esta disposición. Este documento se encuentra en la Secretaría de esta instancia parlamentaria, para su consulta.

En sintonía con la declaración de las autoridades Rapa Nui, la Comisión Mixta estuvo por conferirle una nueva redacción a la propuesta de que se trata, quedando en los siguientes términos: “Cuadragésima sexta. De la participación del Pueblo Rapa Nui en la elección de convencionales constituyentes.

Con la finalidad de garantizar la representación y participación del Pueblo Rapa Nui en la Convención Constitucional, de conformidad con lo prescrito en la disposición cuadragésima tercera transitoria, sólo podrán votar las personas que tengan calidad indígena de dicho pueblo acreditada en el Registro Nacional de Calidades Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o en el Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

Podrán ser candidatos las personas indígenas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta Constitución. Adicionalmente, se deberá acreditar su condición de pertenecientes al Pueblo Rapa Nui, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o su pertenencia en el Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, y su domicilio en la comuna de Isla de Pascua.

Podrán votar por los candidatos rapa nui sólo los electores habilitados, que tengan calidad indígena de dicho pueblo acreditada en el Registro Nacional de Calidades Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o en el Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

En lo que concierne al reembolso adicional de gastos electorales para los candidatos a convencionales rapa nui, se aplicará lo establecido en la disposición cuadragésima quinta transitoria precedente.

En todo lo demás, regirán las reglas comunes aplicables a los convencionales constituyentes.”.

Sometida a votación esta nueva redacción, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores Ebensperger y Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla y Diputados Coloma, Fuenzalida, Saffirio, Soto y Walker.

Con posterioridad, la Comisión Mixta, como resultado del acuerdo político alcanzado para materializar un texto del proyecto de reforma constitucional de que se trata, reabrió la consideración de esta disposición transitoria.

Con motivo de esta reapertura, la Comisión Mixta estuvo por introducirle enmiendas de técnica legislativa para evitar discordancias con la nueva redacción acordada para la disposición cuadragésima tercera transitoria, y precaver problemas de interpretación normativa, quedando con la redacción que fuera votada en conjunto con las restantes disposiciones del texto resultante del mencionado acuerdo.

Seguidamente, el Senador Huenchumilla propuso la disposición transitoria, nueva, que se consigna: “Cuadragésima séptima. De la participación del pueblo tribal afrodescendiente chileno en la elección de Convencionales Constituyentes.

Con la finalidad de garantizar la representación y participación del pueblo tribal afrodescendiente chileno reconocido en la ley N° 21.151, la Convención Constitucional estará integrada también por un escaño afrodescendiente chileno.

Podrán ser candidatos las personas pertenecientes al pueblo tribal afrodescendiente chileno que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta Constitución. Los candidatos deberán acreditar su condición de pertenecientes al pueblo tribal afrodescendiente chileno mediante el correspondiente certificado emitido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los candidatos deberán acreditar que tienen su domicilio electoral en el distrito electoral número 1, correspondiente a la región XV.

Las declaraciones de candidaturas serán individuales y deberán contar con el patrocinio de al menos tres agrupaciones o asociaciones afrodescendientes registradas.

El patrocinio deberá respaldarse mediante un acta de asamblea patrocinante convocada para ese efecto, autorizada por un ministro de fe. Cada organización patrocinante solo podrá patrocinar a una candidatura.

Para los efectos de la elección de Convencionales representantes del pueblo tribal afrodescendiente, los ciudadanos inscritos en el registro electoral, al momento de emitir su sufragio por Convencionales Constituyentes, podrán decidir votar por el Convencional representante de este pueblo tribal, de acuerdo con su autoidentificación. En este último caso, se les proporcionará por el presidente de la mesa solo la cédula correspondiente al pueblo tribal afrodescendiente y podrán votar válidamente solo por uno de los candidatos o candidatas que figuren en la respectiva cédula.

Para este caso se confeccionará una cédula electoral diferente. La cédula se imprimirá titulándose con la frase “Convencional Constituyente representante del pueblo tribal afrodescendiente chileno”. Los nombres de los candidatos aparecerán en orden alfabético de apellidos, comenzando por las mujeres y alternando entre hombres y mujeres.

La elección del representante afrodescendiente será en un solo distrito en todo el país y será electa la candidatura más votada.

En todo lo demás, regirán las reglas comunes aplicables a los convencionales constituyentes.”.

En lo que atañe a esta propuesta, la Comisión Mixta conoció un informe y una presentación acerca de la situación actual del pueblo tribal afrodescendiente chileno, preparados y expuestos por el Subsecretario de Servicios Sociales, a nombre del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Estos documentos se encuentran en la Secretaría de esta instancia parlamentaria, para su consulta.

Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla y los Diputados Saffirio, Soto y Walker. Votaron por el rechazo los Senadores Ebensperger y Galilea y los Diputados Coloma y Fuenzalida.

Posteriormente, la Comisión Mixta, como derivación del acuerdo político alcanzado para materializar un texto del proyecto de reforma constitucional de que se trata, reabrió la consideración de esta disposición transitoria, en el entendido

que propone votarla separadamente en la Sala de ambas Corporaciones, como se precisa más adelante.

3. Disposición trigésima primera transitoria propuesta.

En su inciso primero, establece un porcentaje mínimo de 10% de los candidatos en las listas conformadas por un solo partido de personas en situación de discapacidad, en las listas de personas independientes y los pactos electorales a nivel nacional, a fin de resguardar y proteger su participación en las elecciones de los convencionales constituyentes que redactarán la nueva Constitución.

En su inciso segundo, prescribe que la infracción de dicho deber conllevará el rechazo de todas las candidaturas declaradas al órgano constituyente del partido o pacto de independientes que no haya cumplido con estos requisitos.

Con motivo del análisis de esta disposición transitoria, acordada en el primer trámite constitucional por la Cámara de origen, el Senador Huenchumilla propuso reemplazarla por la siguiente: “Cuadragésima octava. De la participación de las personas con discapacidad en la elección de Convencionales Constituyentes.

Con la finalidad de resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en las elecciones de los Convencionales Constituyentes para redactar la nueva Constitución Política, de la totalidad de las declaraciones de candidaturas de las listas conformadas por un solo partido político o pactos electorales de partidos políticos, se establecerá un porcentaje mínimo del cinco por ciento del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad. Para calcular este cociente, se aproximará dicho porcentaje al entero superior.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, los candidatos deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el artículo 13 de la ley N° 20.422, a la fecha de presentación de sus candidaturas. El Servicio de Registro Civil e Identificación o, en su caso, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, dependientes del Ministerio de Salud, deberán facilitar al Servicio Electoral los datos debidamente actualizados de las personas con discapacidad certificadas, dentro de un plazo de quince días corridos a contar desde la publicación de esta norma. Dicha información deberá ser actualizada hasta la fecha de presentación de las candidaturas.

Asimismo, podrá acreditarse la discapacidad a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, a la fecha de

presentación de candidaturas, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá facilitar al Servicio Electoral los datos de los asignatarios dentro del plazo previsto en el inciso anterior.

La infracción de lo dispuesto en los incisos anteriores conllevará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a la Convención Constitucional de los partidos o pactos electorales respectivos que no hayan cumplido con estos requisitos. En caso de rechazo, se podrá corregir dicha infracción ante el Servicio Electoral dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución sobre aceptación o rechazo de las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N.º 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N.º 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Sin perjuicio de lo anterior, procederá reclamación en los términos del artículo 20 del mismo cuerpo legal.”.

Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Senadores Ebensperger y Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla, y Diputados Coloma, Fuenzalida, Saffirio, Soto y Walker.

Posteriormente, respecto de esta proposición la Comisión Mixta, a instancias del Senador Galilea, consideró la posibilidad de reducir a tres por ciento el porcentaje mínimo del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad que la disposición establece.

La mayoría de la Comisión, con el voto de los Senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla y los Diputados Saffirio, Soto y Walker, estuvo por mantener el guarismo de 5% que consulta la disposición de que se trata.

Por su parte, los Senadores Ebensperger y Galilea y Diputados Coloma y Fuenzalida, estuvieron por reducir a 3% el porcentaje en comentario.

REACCIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANTE EL DESPACHO DE LEY

Biobio.cl. Martes 22 diciembre de 2020 | 09:46

"No se metan con nuestros escaños": etnias exigen que partidos se alejen de sus candidaturas.

Los pueblos originarios acusan letra chica en la reforma de escaños reservados. Dicen que los partidos políticos dejaron una puerta abierta para hacerse de los puestos exclusivos: *"Ya hay indicios de movimientos de colectividades para captar el único cupo que tiene el pueblo Rapa Nui"*, advierten desde la isla.

No hay conformidad en los pueblos originarios tras la aprobación de la reforma que les asegura exclusividad en 17 de los 155 cupos que componen la Convención Constitucional que redactará una nueva Constitución.

Líderes de pueblos atacameño, rapanui, mapuche y kawashkar plantearon sus dudas ante una eventual "captura" de los partidos de sus escaños reservados, debido a la opción de que puedan ser militantes de colectividades, con ascendencia étnica, quienes postulen a los puestos que se legislaron para representar a comunidades y, al final, terminen por obedecer colores políticos.

"No se metan con nuestros escaños", dice el dirigente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche y jefe comunal de Tirúa, Adolfo Millabur, quien analiza presentarse como candidato a convencional si es que su comunidad de la provincia de Arauco lo decide.

"Son nuestros cupos", replica el alcalde de Rapa Nui, Pedro Pablo Edmunds Paoa. Una elección que está programada para el domingo 11 de abril de 2021.

Lo que dice la ley

La reciente reforma constitucional que permitió los 17 escaños reservados para pueblos indígenas fue aprobada a mediados de diciembre. La ley asigna 7 cupos para el pueblo mapuche, 2 para los aimara y un escaño por cada pueblo, diaguita, colla, atacameño, quechua, yagán, kawésqar, chango y rapanui. Sobre los requisitos para los candidatos la legislación señala que deberán acreditar que pertenecen a algún pueblo, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Conadi, a excepción del pueblo chango, quienes sólo deben hacerlo por medio de una declaración jurada.

También se establece que las postulaciones de pueblos mapuche, aimara y diaguita deben contar con el patrocinio de al menos 3 comunidades o 5

asociaciones indígenas registradas ante Conadi o un cacicazgo tradicional, reconocido por la ley, o 3 organizaciones representativas de pueblos que no estén inscritas. Se permiten candidaturas patrocinadas por 120 firmas de personas con calidad indígena acreditada, del mismo pueblo, para el caso mapuche, aimara y diaguita. Respecto de los otros pueblos, alcanzará solo con el patrocinio de una comunidad, asociación registrada u organización no registrada o con el patrocinio de al menos 60 firmas.

Adolfo Millabur asegura que el mundo mapuche está disconforme cómo quedó la ley.

“Lo primero, que no sea por auto identificación, sino que por registro, que por el tiempo que queda completarlo, es una complicación extra. La propuesta inicial era que fueran 24 y quedaron 17. Nosotros, los mapuches, somos los grandes perdedores de los escaños, porque somos el 86% de la población indígena y tocamos menos de lo que debiera ser”, asevera Millabur.

“También el requisito que nosotros propusimos, que se definieran que la candidaturas fueran patrocinadas por la comunidades, asociaciones de indígenas y que fueran sin militancia política los postulantes. Todo eso no quedó. Para patrocinar una candidatura tiene que ser con 3 comunidades o 5 asociaciones indígenas, pero además se impuso otra opción, que sean 120 personas, que de manera individual puedan patrocinar a un candidato indígena”, agrega Millabur.

Esta última opción no acepta el mundo mapuche de Arauco, ya que dejaría espacio para que partidos políticos puedan intervenir y, según Millabur, viciar el objetivo del proceso. *“Así caben militantes de partidos políticos, incluso sin decirlo públicamente, esa es la trampa”,* añadió.

“Nosotros esperamos que no pase y nuestra aspiración es que no se involucren los partidos, porque lo que esperamos que estén ahí representen a los pueblos. Si lo hacen engañan a la gente y seguirían con el tutelaje a la aspiración de los pueblos, sería una mala señal si influyen”, sostiene.

Desde Rapa Nui, el jefe comunal, Pedro Pablo Edmunds Paoa, también se une al reclamo de su par de Tirúa.

“Ahí está la trampa -critica el alcalde- así como otras que hemos visto (...) No paran de jugar con algo que no deberían hacerlo político. Todos los pueblos originarios coincidimos en que debemos enriquecer la nueva República y esa postura tiene que ver con la base civilizatoria de las etnias”. “Involucrar a lo político, daña eso, ensucia. Hay que ponerle freno a eso, para evitar que eso pase. Por eso luchamos los pueblos originarios”, añade.

Pedro Pablo Edmunds Paoa asegura que en la isla ya hay indicios de movimientos de partidos políticos para captar el único cupo que tiene el pueblo Rapa Nui en la Convención Constitucional.

Desde el mundo atacameño

Sergio Cubillos Peine, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños -pueblo originario al que se le asignó un cupo en la Convención Constitucional- indicó que en el norte hay dudas sobre participar en el proceso.

“Encontramos que 17 escaños no es una participación efectiva de los pueblos originarios. Esto es un juego maquinado por un sector político”, destaca Cubillos. Sobre la posibilidad de que intervengan partidos políticos en el proceso, el representante atacameño afirma que “es lo que decía antes, esto tiene que ver con un aprovechamiento de los partidos para tener el control de la Convención Constitucional. Por eso, que se deje que personas que militan en partidos puedan ser candidatos tiene que ver con eso”, añade. “Nosotros vamos a denunciar si pasa eso. No solo si pasa en el pueblo atacameño, sino que otros hermanos también lo harán, del norte y sur de Chile, eso se va a denunciar”, advierte Cubillos.

“No van a pelear por nuestros derechos”

Haydee Águila, presidenta de la comunidad Atap del pueblo kawashkar, en la región de Magallanes, también golpeó la mesa en relación a la ventana abierta que les quedó al mundo político para hacerse de sus cupos. La dirigente explicó que en la zona hay 16 comunidades kawashkar, algunas que están guiadas por acción de partidos políticos, sin embargo, en el grupo de las cinco a la que pertenece ella, ninguno se vincula con ellos.

“No hay que confundir la temática de un pueblo originario, jamás se ha hecho con partidos políticos”, destaca. “Ellos nunca van a pelear por un derecho indígena. Van a pelear por ellos y su gente. No se olviden que acá hubo un etnocidio con nuestro pueblo, en que el Estado no se ha hecho responsable”, añade.

Emol.com, 11.12.2020

Escaños reservados: Oposición y Chile Vamos valoran decisión "histórica" y piden ratificar aprobación en la Cámara y el Senado

Al respecto, el presidente de la comisión, el senador Alfonso De Urresti (PS), comentó que *"se consiguió un hecho histórico de tener representación de escaños reservados, contra viento y marea, contra muchos que se oponían, contra quienes no querían reconocer o dar un número muy bajo". "Esto se va a votar en el Parlamento y ahí vamos a ver cómo se respalda esta integración efectiva de los pueblos originarios en el proceso constitucional",* añadió, refiriéndose de ese modo la votación a la que se someterá el proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados y el Senado, donde debe obtener un apoyo de tres quintos.

En la misma línea, el diputado de la DC, Matías Walker, señaló que *"la verdad es que uno siempre quiere más, habíamos planteado 24 escaños para los pueblos originarios, pero es que es un buen resultado, un paso histórico, porque no solamente vamos a tener la primera Constitución en la historia de Chile escrita en democracia, sino que además con paridad y participación de todos los pueblos originarios".*

En tanto, el diputado de RD, Miguel Crispi, comentó que *"la verdad es que ha sido muy difícil, ha sido de una posición muy inflexible por parte del Gobierno. Se han entregado cosas que eran valiosas para las comunidades indígenas, pero finalmente lo que queda y lo que importa es que tendríamos escaños reservados". "Lo vamos a votar el lunes y espero que esta votación sea positiva y el oficialismo cumpla con apoyar esta iniciativa que es fundamental, tanto por el momento político que se vive en la Araucanía, como por la historia republicana de nuestro país. Esta es la oportunidad que tendremos en mucho tiempo de poder resarcir una deuda enorme que el Estado tiene con los pueblos indígenas",* enfatizó.

Visión en Chile Vamos

Desde el oficialismo, el senador de RN, Rodrigo Galilea, destacó la importancia de contar con una legislación que permita no solo la participación de los pueblos originarios sino también contar con criterios de representatividad y paridad. *"Los pueblos originarios de nuestro país, que estaban en Chile antes de que llegara el imperio español, tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes, para que pongan sus puntos de vista, su cosmovisión y costumbres a disposición del proceso constituyente y lo enriquezcan"*, destacó el parlamentario.

En esa línea, aseguró que la discusión que se dio sobre la materia, que superó las 40 horas de debate, fue *"un buen proceso, es una cuestión única en la historia de Chile y espero sinceramente que esto sea para el bien del futuro de nuestros hijos en el país"*. En la misma línea, la senadora Luz Ebensperger (UDI) valoró los acuerdos alcanzados y el trabajo de los equipos técnicos durante la revisión del proyecto e hizo hincapié en la necesidad de revisar los aspectos administrativos y técnicos, respecto a la elaboración de las cédulas electorales y que sean viables en el Servel. Finalmente, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), señaló a Emol que *"nosotros valoramos profundamente que se hayan recogido las propuestas que para Chile Vamos eran fundamentales y que pusimos como requisitos para poder aprobar esta reforma constitucional, como que los 17 escaños reservados sean dentro de los 155 actuales para evitar cambiar las reglas del juego"*. *"En segundo lugar, que la votación del pueblo afrodescendiente fuera por separado, porque nosotros aquí queremos garantizar los escaños para los pueblos originarios y el pueblo afrodescendiente, reconocido por nuestra legislación, es un pueblo tribal no originario. Y en tercer lugar, poder tener un padrón cerrado 45 días antes para evitar la auto identificación al momento de la votación"*, añadió.

INFORME DE COYUNTURA Y ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL
DICIEMBRE 2020

Solicitante: H. Senador Pedro Araya Guerrero
Autora: Cristina Orellana Quezada
Periodo: diciembre 2020

I. HECHOS DESTACADOS DE LA AGENDA REGIONAL

1. Perfilamiento por probidad

El nuevo alcalde de Antofagasta, Wilson Díaz Vásquez, no tuvo muchas dudas sobre la orientación que daría a su corta gestión. De inmediato anunció la reestructuración de la planta tanto de la municipalidad como de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, concentrándose en los cargos de altos sueldos que, a su juicio, no se justifican.

Contando solo con 100 días por delante, el municipio está concentrado en enfrentar los efectos de la pandemia, enfrentar el comercio ambulante en el centro de la ciudad, abordar los efectos de la crisis económica, reactivar los proyectos paralizados y remediar el aumento de personas en situación de calle.

Pero se busca dar la impresión de trabajar en una “limpieza” interna, prometiendo una reestructuración de la planta municipal, algo que excede por completo las atribuciones de un alcalde, diciendo, vagamente, que se realizaría un “reajuste de trabajadores”.

Lo que, en realidad, se quería decir es que los sueldos comenzarían a corresponder a las funciones efectivamente realizadas. En paralelo, se prometía la realización de auditorías, aunque reconocía que “no sé si alcancemos a hacerlas todas” las cosas que pretendía.

En fondo, su programa se podía expresar en pocas palabras: “Quiero tratar en lo posible de que la comunidad viva tranquila respecto de lo que hacemos acá, y que tenga mayor seguridad de su ciudad. Quiero preocuparme de las verdaderas carencias que existen aquí, siendo más cercano para la comunidad, pero no para la foto, lo mío es compromiso y voy a demostrarlo con hechos”.

Todo lo dicho tenía como propósito la postulación a la alcaldía, algo de lo que no hacía ningún misterio: “Si se me dan las cosas, por supuesto que me gustaría ser alcalde de Antofagasta el próximo periodo. Si tengo la posibilidad de hacer más cosas como alcalde, por supuesto que voy”.

2. El comercio ambulante como prueba de fuego

El plan de trabajo del nuevo alcalde tiene el problema de que no se puede implementar sin pagar costos, algo que se puede pensar teniendo tiempo de reponerse del impacto inicial, pero es tiempo precisamente lo que no tiene edil. El resultado bien puede decir la anulación de la actividad municipal, si se piensa en hacer una diferencia significativa con lo que se tenía previamente.

Esto quedó graficado nítidamente con el tratamiento dado al comercio informal. Alcalde Wilson Díaz recalcó que comerciantes seguirán en el casco central hasta pasadas las fiestas. Existen unos 800 vendedores informales, principalmente ubicados en los ejes peatonales de calles Matta y Prat. El problema se presenta porque el comercio establecido los considera como una competencia desleal permitida por la autoridad comunal.

Sin embargo, Wilson ha argumentado que “no seré yo quien le quite el alimento a sus hijos”. Ha insistido que nos encontramos ante “circunstancias excepcionales y no podemos dar vuelta la espalda a quienes quieren sobrevivir. La municipalidad va a estar atenta a que esta actividad se desarrolle de manera provisoria de la mejor manera hasta el 31 de diciembre, y esto se les ha manifestado en varias oportunidades”.

En este caso, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Aunque Wilson trata de presentar el caso como una medida extraordinaria y de corta duración, en realidad ya ha dejado sin efecto una de sus medidas anunciadas más importantes.

3. Inhabilitación de Rojo

El Tribunal Electoral Regional (TER) inhabilitó a la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para ocupar cargos públicos por un periodo de 5 años. La sanción fue justificada en virtud de la contravención grave las normas de probidad administrativa y notable abandono de deberes.

A cerca de 11 mil millones de pesos ascendería el daño patrimonial involucrado en los 13 cargos acogidos por el TER.

Mauricio Cisternas, el abogado que representó a los concejales que presentaron la acusación contra Karen Rojo, tiene un juicio lapidario: "Todas las irregularidades están acreditadas, las acreditó Contraloría, las acreditamos nosotros a través de documentación, mediante prueba de testigos, hay mucha información de prensa también, entonces todo lo que sostenemos está bastante probado". Y agrega, "se permite que la gente empiece a trabajar sin contratos, sin garantías, o se recurre las contrataciones directas sin fundamento legal. Ahí hay una conducta frecuente y permanente de desconocimiento de las normas y de los principios que regulan el actuar de la administración, que son bastante claros".

Así está concluyendo el denominado "Caso Main", investigación paralela de la justicia, donde la exalcaldesa está formalizada por fraude al fisco y negociación incompatible, debido a la contratación de asesorías con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Aunque esta resolución puede ser aún apelada por Rojo, el pronóstico de una posible reversión de la sanción es mínimo.

4. Aumento del número de contagios.

Se ha producido un aumento del número de contagiados por Covid-19, principalmente en Antofagasta y Tocopilla. En la última semana el número de casos activos en la región aumentaron un 34% y, lo que es más preocupante, en Antofagasta ese aumento llegó al 69%. La explicación más plausible es que el mayor número de contagiados se debería al mayor traslado de trabajadores de regiones que representan alta tasa de transmisión hacia faenas mineras o portuarias de la región. Por esta razón se han empezado a cursar más sumarios sanitarios, pero el efecto ha sido casi nulo. Además, se observa un relajo en la medida de distanciamiento social y uso de mascarillas en la población, lo que hace presagiar que los casos seguirán incrementándose. El aumento de la velocidad de contagio puede tener efectos catastróficos en el conjunto de la población. Por ahora no ha aumentado el promedio de pacientes en unidades de pacientes críticos, sin embargo, en las próximas dos semanas empezarán a llegar a los hospitales los casos graves correspondiente a los que se han contagiado en estos días. La situación puede llegar a desbordar la capacidad del sistema. En Antofagasta el Hospital Regional las camas UCI están ocupadas al 100%, mientras que en el hospital de Calama están ocupadas en un 98%. Cualquier aumento desborde la capacidad instalada del sistema de salud.

5. Aumento de campamentos

Desde principios de 2020 se concretaron 250 tomas a lo largo del territorio nacional, con más de 21 mil familias asociadas a ellas. En la región de Antofagasta existen 79 asentamientos, con 7.641 hogares, en la comuna del mismo nombre se concentran 63 campamentos y 5.581 familias. Solo en mayo de este año surgió una nueva toma, el Campamento Altamira, donde habitan cerca de 120 familias. Aun cuando los catastros no están completos, se reconoce un aumento de nuevos campamentos en Antofagasta, Taltal y Tocopilla. Se estima que los principales motivos que llevan a las familias a los campamentos son el alto valor de los arriendos y los bajos sueldos, la crisis económica y la falta de empleo.

II. LABOR SENATORIAL EN EL DEBATE NACIONAL

El senador Pedro Araya ha mantenido la atención puesta en los principales centros de atención ciudadana.

- **Acuerdo para asegurar la participación de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional:**

“Finalmente fue aprobado el proyecto del segundo retiro. Si bien, quedó con impuestos para rentas superiores a 1,5 millones de pesos, esto va a permitir que muchas familias estén más tranquilas”. “Después de intensas negociaciones, llegamos a un acuerdo con el gobierno y con los senadores de derecha en orden a garantizar la participación de los pueblos originarios”. “De esta forma, los pueblos originarios van a tener escaños reservados que garantizan la adecuada participación de ellos en el proceso constituyente. En el caso de nuestra región, se garantiza un cupo para el pueblo Likan-antai o atacameños”. “Es muy importante porque queremos que la nueva constitución sea legítima, que todos se sienten a la mesa discutido qué tipo de Constitución queremos para nuestro país. Por eso este acuerdo es histórico porque también hace justicia a los pueblos originarios de nuestro país”.

- **Asegurar la expedida entrega del segundo retiro del 10%:**

“Esperamos que este segundo proceso que se va a iniciar del retiro del 10% de los fondos previsionales, las AFP dispongan de todos los medios necesarios a fin de facilitar ese trámite a sus afiliados”. Esperamos “que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron en el primer retiro y en esta línea, es indispensable que se cuenten con los canales de atención despedidos a fin de que la gente pueda hacer su solicitud y ojalá poder retirar sus dineros antes de las fiestas de fin de año”.

- **Respaldo a la acción municipal ante ministerio de Salud:**

“Junto al alcalde de Sierra Gorda, José Guerrero, sostuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Salud, Enrique Paris, para tratar temas de salud locales y, en especial, los planes para enfrentar la pandemia del coronavirus”.

- **Medidas en caso de un segundo brote:**

“Claramente nos preocupa el aumento de personas contagiadas por coronavirus en estos días. Eso demuestra que la pandemia está lejos de determinar. Por eso son muy importantes las medidas de autocuidado: usar mascarillas y lavarse permanentemente las manos”. “Queremos hacerle un llamado al Presidente Piñera y al ministro de Hacienda Ignacio Briones a que nos vayamos preparando como país en caso de tener un rebrote de coronavirus”. “Probablemente mucha gente perderá sus empleos o no podrá salir a trabajar. Por esa razón es importante que desde ya se prepare un plan de protección social a fin de poder ayudar a estas personas, especialmente a las de clase media, que han sido las más afectadas en la pandemia de coronavirus”.

III. ANALISIS COYUNTURA REGIONAL DICIEMBRE

- Los cambios políticos no han hecho otra cosa que comenzar y seguirán produciéndose a ritmo vertiginoso. Si ya la primaria de gobernadores regionales significó un golpe de timón, este se amplificará ahora en la negociación opositora para las elecciones de abril.
- La dificultad del acuerdo para la región queda evidenciada por ser esta la única región donde no se concordaron consultas ciudadanas para escoger candidatos a alcaldes o alcaldesas. Se tendrá, pues, que definir candidaturas por acuerdo, si es que no se quiere llegar a competir divididos por las alcaldías.
- La nota característica de esta ocasión en la dispersión de candidatos, lo que pone una nota adicional de complejidad para alcanzar cualquier posible acuerdo. Por supuesto, la existencia de Unidad Constituyente (que agrupa al PS, PPD, PR, DC, PRO y Ciudadanos), permite una base sobre la cual llegar a un entendimiento inicial, esto no basta. El Frente Amplio y el PC quedan fuera de esa agrupación, lo que significa que la negociación ha de hacerse por etapas, y el tiempo no es precisamente holgado como para tener el éxito asegurado.
- La salida de Karen Rojo y luego su eliminación definitiva de la próxima competencia por la alcaldía de la principal comuna de la región, no facilita para nada las cosas. Pone el premio mayor al alcalde de varios actores y eso alimenta la competencia.
- La ciudadanía, o los que estén interesados en estos temas, no podrá hacerse una idea precisa de lo que ocurra. Sucede que todos dicen querer elecciones primarias, pero pocos son los que en realidad tengan a la primaria como su opción principal.
- En realidad, una consulta ciudadana queda casi descartada a partir de la próxima semana, teniéndose por necesidad que ocupar un método alternativo, entre las cuales se incluyen la realización de encuestas o la selección por negociación (algo cada vez más impresentable).

- Por si fuera poco, queda al alcalde de independientes la recolección de firmas que les permita saltarse todos estos trámites y llegar directamente a la papeleta electoral en abril. Si esto sucede, la realización de las primarias queda doblemente descartadas porque ya no quedan eliminados aspirantes que puedan dividir los votos, por lo cual se fortalece la dispersión opositora.
- La actividad política se está concentrando en los aspectos señalados, mientras las preocupaciones están quedando sin atención. Lo sucedido con la alcaldía de Antofagasta muestra que los anuncios de medidas están lejos de significar cambios apreciables.
- La llegada de un segundo brote del coronavirus, las dificultades económicas de la población y la realidad del aumento de la pobreza y la desprotección hace necesario privilegiar que la senatoria se convierta en voz de los no escuchados.

COQ/coq

INFORME DE COYUNTURA Y PROYECCIÓN DE LA LABOR PARLAMENTARIA

DICIEMBRE 2020

Solicitante: H. Senador Pedro Araya Guerrero

Autora: Cristina Orellana Quezada

Periodo: diciembre 2020

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

Una crisis sanitaria que no cede

En Antofagasta había cierto optimismo porque, tras 9 meses se registraron a inicio del mes 161 casos activos de covid-19 en toda la zona, 104 de ellos en la capital regional y 6 comunas tenían menos de 10 casos. A fines de diciembre la situación era bien distinta con 284 casos activos, los que en su mayoría se concentran en Antofagasta (205).

La comuna de Antofagasta se ubicaba en el lugar número 11 en el ranking de comunas con mayor cantidad de casos en el país. Lejos quedaba la baja sostenida hasta el 22 de noviembre, cuando llegó a 3 casos por 100 mil habitantes. Una preocupación especial se concentra en el caso de los jóvenes, porque son los que menos precauciones toman y los que se sienten más inmunes al virus, lo que no deja de ser una falsa seguridad. De hecho, las edades en que más casos se han presentado son entre los 25 a 34 años.

La tendencia nacional es la misma que en la región, con un alza en los contagios, pero eso no entrega ningún consuelo. Lo que se espera es que los cálculos de los expertos se verifiquen, es decir, que se experimente una nueva baja en los casos reportados pasado el año nuevo. En todo caso, se estima que este rebrote alcance una magnitud de solo un tercio de la potencia alcanzada en la primera ola.

Pero confiarse no es una buena idea. El comportamiento se relaja en las festividades de fin de año, aumenta el flujo de personas en calles y tiendas y la distancia social en poco respetada. Por eso, en realidad, no se sabe cuánto afectará este cambio de conducta en los casos de contagio. Por consiguiente, si bien la pandemia ha mostrado la peor parte, las pérdidas de las vidas humanas esto ha pasado a ser un conteo no un aprendizaje real, el gobierno no le ha sido factible introducir cambios de conducta en la ciudadanía, las medidas si bien han sido restrictivas no han producido cambios en las conductas de nuestros compatriotas. Hoy la respuesta que tenemos que entregar a los ciudadanos es ver no solo la población mas vulnerable sino también aquella que ha recibido los costos de la pandemia de mantener la operación minera activa, generando ingresos a los privados y a las arcas fiscales, es aquí donde tenemos una gran incertidumbre en medio de la vacunación masiva: ¿cuantas vacunas llegaran a la región?, ¿como será la articulación publico privada? ¿permitirá ésta cubrir toda la vacunación masiva? o los criterios de regionalización solo sirven para castigar a las regiones productivas.

Tendremos que esperar el plan que presente la autoridad. Saber cuales son los criterios y como se establecerá la priorización y en concreto cual será el numero de vacunas que estará disponible para la región y en cuanto tiempo el 100 por ciento de la población la tendrá disponible.

II. HECHOS DESTACADOS DE LA AGENDA REGIONAL

Ad portas de la elección de constituyentes, la importancia de los Independientes.

En Antofagasta ya son 17 los independientes que han inscrito ante el Servel sus candidaturas a convencionales constituyentes por el Distrito 3, correspondiente a la Región de Antofagasta. En el caso de la Región de Antofagasta son cinco cupos para integrar la convención constituyente, incluyendo los escaños reservados para pueblos originarios. Entre los precandidatos figuran representantes de movimientos sociales, académicos, gestores culturales, ambientalistas, profesores y dirigentes de ollas comunes. Estos aspirantes deberán primero reunir las firmas necesarias para inscribir sus candidaturas y así competir en la elección del 11 de abril próximo. Los precandidatos fuera de lista requerirán el patrocinio de un número determinado de ciudadanos igual o superior al 0,2% de los electores que votaron en el respectivo distrito en la última elección de diputados.

La creación de listas de independientes, para lo cual se requerirá un número de firmas igual o superior al 0,5 por ciento de los electores que sufragaron en la misma elección de diputación. Los aspirantes independientes requerirán un mínimo de 300 ciudadanos independientes para patrocinar sus candidaturas y, en el caso de las listas, 500 patrocinios. El plazo para inscribir dichas candidaturas vence el 11 de enero de 2021.

Los nuevos equilibrios en la Municipalidad de Antofagasta.

De los antecedentes recopilados que se han expresado por los distintos medios de comunicación de la región, el actual alcalde Wilson Díaz ha empezado a hacer nuevas contrataciones con "equilibrio partidista", un equipo de confianza multipartidario. Este es un paso complejo, puesto que las anteriores administraciones se han excedido en este punto y, además, quedaría catalogado como uno más de una larga lista que opera igual bajo denominaciones distintas. Pero lo que se ha resuelto es cambiar los titulares de algunas direcciones municipales, que corresponden a cargos de confianza.

Entonces con este movimiento ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es que el primer círculo de confianza provenga del PS en atención a la militancia de origen del alcalde. Por eso se espera que Luis Caprioglio asumirá el cargo de administrador municipal e Ignacio Pozo, asumirá en la Dirección de Servicios Traspasados. Pero los equilibrios deben representarse en otras incorporaciones o cambios de puesto. Marcelo Encina (dirigente radical) se desempeñará en la Dirección de Seguridad Pública; el abogado (DC) Cristián Arenas en la Dirección Jurídica. Por otra parte, las desvinculaciones han ido a la par, entre ellas, la más comentada ha sido la de Ignacio León, hasta hace poco a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y ahora trasladado a la Dirección de Seguridad. En la Corporación Municipal se han desvinculado funcionarios, entre ellos Edgardo Navea y Alejandro Rojo (ex coordinador del PIE). Este punto se hace relevante dado que la ciudadanía requiere eficiencia en la gestión y que los programas se implementen en tiempo y forma y no que la disputa sea intra municipalidad a ver quien se queda con el mejor espacio.

Aumento de los postulantes a representantes municipales

Un renovado interés por representar a la ciudadanía en los cargos electos se ha presentado a la región. En la Municipalidad de Antofagasta, ya se detectan 13 interesados a la alcaldía, lo que augura una elección atípica y con una mayor dispersión de los votos. Y eso todavía puede variar a favor de un mayor número de postulantes, dado que el 11 de enero el Servicio Electoral cierra el plazo para la declaración de las candidaturas a las alcaldías. En la capital de la región esto se entiende, dado el vacío dejado por la ausencia obligada de Karen Rojo y la seguidilla de dos alcaldes en menos de cinco meses: Ignacio Pozo (PR) y Wilson Díaz (PS). El abanico de opciones es el siguiente: Roberto Soto (UDI), Wilson Díaz (PS), Fernando San Román (ind.), Fabián Ossandón (ind), Jonathan Velásquez (ind), Lila Vergara (PPD), Iván Ávila (RD), Pablo Iriarte (PC), Sebastián Videla (ind), Jorge Pérez Jélvez (ind), Alejandro Álamos (FRVS) y Gonzalo Dantagnan (DC). Las postulaciones siguen abiertas.

En la segunda comuna de la región, Calama, los postulantes son, por ahora, Daniel Augusto (RN), alcalde en ejercicio, Ignacio Urdangarín (Ind.), Ledy Ossandón (ind.), Dinka López (NT), Jorge Latorre (ind), Carolina Latorre (DC), concejal en ejercicio, Eliecer Chamorro (FRVS), Miguel Ballesteros (RD) y Liliana Ugarte (PC). Como nunca, los resultados son inciertos, debido a la emergencia de candidatos inesperados y la desaparición de los esperados. La gran incógnita en este momento es saber en base a qué electorado formará su decisión de voto.

El posicionamiento de los nombres de los competidores será un verdadero problema. Se supone que los aspectos en los que se concentrará el interés de los votantes en la capital regional serán la activación de apoyo con motivo de la pandemia, la reactivación económica, la situación de los campamentos y la falta de espacios públicos. Para el ex concejal Jaime Araya la clave parte con vislumbrar si las elecciones de abril motivarán o no a la participación ya lograda en el plebiscito. La participación en las primarias augura una baja en la participación. De seguro bajará en un porcentaje, pero no sabemos en cuánto.

III. LABOR SENATORIAL

El senador Pedro Araya ha mantenido la atención puesta en los principales centros de atención ciudadana.

- **Rechazando una representación en el Consejo para la Transparencia:** “Mi rechazo a la nominación de Natalia González al Consejo para la Transparencia no se trata, para nada de un tema personal o que tenga que ver con su calidad profesional. Ella forma parte de un centro ideológico que es Libertad y Desarrollo, que no es apartidista como lo señaló la postulante. ¡Por favor! Se sabe que es una entidad de derecha que, además, es financiada por las grandes empresas de este país”.
- **Preparándose para un segundo brote:** “Se viene... se viene el rebrote. El tema está en la prensa, en los comentarios de la gente. Sin embargo, la discusión debe ser cómo evitamos llegar a ese punto ahora. Urge que el gobierno y la autoridad sanitaria adopten medidas para no tener que repetir lo ocurrido este año. Y de nosotros reforzar el autocuidado.
- **A favor de los escaños reservados:** “Finalmente, se aprobaron los escaños para pueblos indígenas en la Convención Constituyente. La derecha se opuso a la propuesta original, pero se logró un acuerdo que permita la participación de los pueblos”.
- **Obligación de tener una política migratoria responsable:** “Uno entiende la crisis humanitaria existente en Venezuela, pero hoy también hay un contexto distinto, producto de la crisis económica que vive nuestra región y por la pandemia del coronavirus”.

- **Abogando por un mejor Fogape:** “El ministro de hacienda, Ignacio Briones, ha señalado que el gobierno está preparando un Fogape 2.0 para ir en ayuda de pequeñas y medianas empresas que la están pasando mal producto de la pandemia del coronavirus”. “Queremos pedirle al gobierno, al ministro Briones, que aprendan de los errores que se han cometido en una primera instancia, de tal forma tal, de permitir que muchas pequeñas y medianas empresas que no pudieron acceder al Fogape lo pueden hacer”. “Por esa razón es necesario flexibilizar los requisitos que se le están pidiendo para poder optar a los créditos. Y junto con ello, que se pueda generar una línea especial de financiamiento para las empresas del turismo y gastronómicas que fueron las grandes perjudicadas con el coronavirus y que no pudieron acceder a financiamiento para continuar con sus emprendimientos”.
- **Una advertencia en seguridad ciudadana:** “A propósito de la balacera en Maipú, avísenle a subsecretaria Martorell que aún esperamos en el Senado Chile las indicaciones del Ejecutivo para la ley de control de armas”.

IV. PROYECCIÓN PARA ENERO DE LA LABOR PARLAMENTARIA

- Dada la fuerte tendencia a la dispersión de los votantes y en número verdaderamente inusual elecciones y de candidatos en cada una de ellas, lo que queda es la simplificación de las alternativas, presentando grandes opciones conectadas entre las cuales escoger.
- A diferencia de cualquier otra elección, las encuestas conocidas muestran que la elección que concentra la atención de los votantes es la de constituyentes, seguida por las municipales y, con mucha distancia, la de gobernadores regionales.
- Los cambios políticos no han hecho otra cosa que comenzar y seguirán produciéndose a ritmo vertiginoso. Si ya la primaria de gobernadores regionales significó un golpe de timón, este se amplificará ahora en la negociación opositora para las elecciones de abril.
- Como todas las elecciones tenderán a conectarse, la mejor estrategia consiste en apoyar candidatos con perfil ciudadano, poco partidista y vinculados a la centroizquierda.

- La competencia será dura, pero se puede defender que estamos entrando en un nuevo ciclo político y tenemos que asegurarnos de que a Chile la vaya bien en la transición. Para construir una mejor sociedad con gobernabilidad democrática, mayor justicia social y que asegure una convivencia pacífica es indispensable una conducción sólida del proceso.
- Resulta que encontramos solo un actor colectivo, de reciente formación, que es capaz de aportar las condiciones básicas de éxito en esta transición: Unidad Constituyente. Eso es algo a destacar en las siguientes semanas.
- Chile requiere que se establezca una mayoría estable y coherente que consiga poner en sintonía 5 logros articulados en eventos de gran importancia: hay que otorgarle mayorías a la Presidencia, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales, al Parlamento y a la Convención Constitucional.
- Cuando todo está cambiando no se pueden tener pugnas importantes o soportar la acción incoherente entre estas instancias. El futuro será de quien pueda, al mismo tiempo, dotar a Chile de un liderazgo de nuevo cuño, conformar un gobierno sólido, construir una coalición a la altura de los tiempos y entregarle al país una Constitución que deberá durar décadas. Solo una misma mayoría reconocible, expresada en instancias diferentes y amoldada a sus particularismos puede otorgarles un rumbo seguro y progresista a los cambios.
- La derecha no puede cumplir con esta labor. Ofrece un liderazgo fracasado, superado y sin apoyo. Tiene que poner en evaluación ciudadana un gobierno que encontró problemas y entregó una crisis amplificada. Se expresa en una coalición se ha ido debilitando hasta quedar irreconocible. Obtendrá menos gobiernos regionales y locales que la oposición. Es una minoría desgastada en el ejercicio del poder, que parte la competencia sin asegurar gobernabilidad. La derecha se ha convertido en sinónimo de conducción insegura.
- El Frente Amplio no es una alternativa porque es cada vez menos amplio, porque en relación con la centroizquierda consigue un tercio de sus votos y porque está restringiendo el arco de sus integrantes. El PC es un partido que tiene un candidato muy bien posicionado que representa un programa con claro perfil de izquierda y debe ser reconocido como una opción válida. Entre ambos nacerá una alternativa que se ofrecerá al país.

- Lo que se vislumbra hoy es que, si bien puede obtener la Presidencia, difícilmente podrá conseguir las otras cuatro mayorías que se requieren para hacer la tarea completa. Le es más fácil a la centroizquierda sumar a la izquierda en la conformación de una mayoría que dé gobernabilidad, que al revés.
- Queda pues lo que hoy se agrupa en Unidad Constituyente más los que faltan por incorporarse. La responsabilidad es enorme y el conglomerado no está todavía a la altura del desafío. Le falta adquirir suficiente sentido de bien común. Las coaliciones existen porque se dedica tiempo y esfuerzo a construirla juntos. El regateo hay que dejarlo al comercio minorista. Los dirigentes tienen sustituto, pero la centroizquierda unida no lo tiene.

COQ/coq